

tableció que los capitales cedidos como dotes á las religiosas exclaustradas, quedaban exentos del pago de contribuciones, mientras no pasaran á tercer poseedor.

Considerando: Que por lo mismo, las autoridades del Estado de Querétaro no han podido grabar los capitales asignados á las ex-religiosas, sin invadir la esfera de la autoridad federal y vulnerar, en perjuicio de las quejas, las garantías que consignan los artículos constitucionales 16 y 27.

Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la República, se decreta:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 19 de Enero del presente año, que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á las Sras. ex-religiosas Eufrosina de San Juan Bautista, María de la Luz Merlo, Andrea Martínez, María Josefa de Santa Teresa, María Asuncion J. de San Simon, Anna Lefevre, Pomposa Vega y Anna Conia, contra el acto del C. Recaudador de contribuciones, que les cobra estas por los dotes que les señaló el Supremo Gobierno para sus alimentos.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las clavó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico: México, 16 de Julio de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por varias señoras ex-religiosas, contra los actos del C. Recaudador de contribuciones.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que este expediente ha sido formado en virtud de la queja de las Señoras Religiosas exclaustradas que, representadas por D. Bonifacio Carmona y D. Mariano Rodríguez Velazquez, fueron anteriormente amparadas contra el cobro que se les hiciera de contribuciones, por el ciudadano Recaudador del ramo. Es bien sabido que los dotes de las expresadas señoras fueron eximidos del pago de impuestos por el Gobierno general, en uso de sus atribuciones legítimas.

El amparo anterior se concretó á los efectos de la ley de presupuestos, vigente en el Estado; resolviéndose que no debía de haberse hecho extensivo al pago que hoy se reclama. Entónces el que suscribe, creyó que todo lo que fué exigido con posterioridad á la interposicion del primer recurso, se tenía que devolver á las señoras religiosas. El Juzgado resolvió lo contrario, y con esa resolución se conformaron las quejas.

¿Cabe el amparo hoy interpuesto, supuestos estos antecedentes? ¿No se juzgó ya la presente cuestion, habiendo sido una misma la cosa, las mismas personas y tambien una misma la accion?

Estas consideraciones parecerán de mera fórmula, pero es lo cierto que, los juicios no pueden ser interminables, y por tanto la autoridad de la cosa juzgada obstará siempre á los que resuciten una cuestion concluida.

En vista de estas consideraciones, parece que no deberia concederse el amparo solicitado.

Mas examinando con detenimiento los antecedentes de este asunto, viene á comprenderse: que las quejas, jamás se han conformado con el pago de los impuestos que, decretados con anterioridad, se les vinieron á exigir, interpuesto el recurso de amparo: que se limitaron á pedir la protección federal contra los efectos de la ley, y así se les concedió, y que tambien el Juzgado se limitó á declarar que esos efectos no podian estenderse á lo que ni fué reclamado en el juicio, ni concedido. Y aunque la cosa juzgada se tenga por verdadera, haciendo ley entre las partes que han litigado y sus herederos, como es de verse en la ley 32, título 34, Partida 79: con todo, debe cuidadosamente examinarse, si son unos mismos la nueva accion, el mismo cuerpo, la misma cantidad, con las deducidas anteriormente. Y aunque parece que se conformaron las quejas con la resolución del Juzgado; hoy bien visto, se deduce una nueva accion y se instaura nuevo reclamo.

Así las cosas, queda por ver si ha habido ó no violación de garantías en el pago exigido, y es indudable que se ha atacado la propiedad de la concesion hecha á las señoras religiosas, anulándola por un momento. En vista de esto, el Promotor fiscal pide: se conceda el amparo solicitado.

Querétaro, Enero 12 de 1875.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Enero 27 de 1875.

Visto el presente juicio de amparo promovido por los señores D. Bonifacio Carmona y D. Mariano Rodríguez Velázquez, en representación de las señoras religiosas exclaustradas, D^{as} Concepcion Izquierdo y las demas que se mencionan en el escrito del principio, contra actos del Recaudador de Contribuciones Jesus G. Berduzco, quien embargó una libranza valor de cuatrocientos pesos, y remató una paja de agua, para

cubrir impuestos del Estado por capitales de las predichas señoras.

Visto el informe con justificación rendido por la autoridad ejecutora; lo pedido por el ciudadano Promotor fiscal; las pruebas rendidas y los respectivos alegatos:

Considerando: que los actos de que se quejan las señoras religiosas, los hacen consistir en que, el recaudador de Contribuciones les embargó una libranza por valor de cuatrocientos pesos, y remató una paja de agua para cubrir impuestos ó contribuciones de los capitales que el Supremo Gobierno les concedió por vía de dote para sus alimentos, y cuyos capitales se encuentran hoy consignados, el de la señora D^a Mariana Núñez, en la casa número 5 de la calle de Cinco Señores, y el de las demas Religiosas en las Haciendas del "Batan y San Francisco."

Considerando: que conforme á la Suprema disposicion de 26 de Febrero de 1861, el ciudadano Presidente de la República, investido de facultades extraordinarias, dispuso, que las personas que reconocen capitales á favor de las señoras religiosas, no pagaran impuestos ni contribucion alguna de dichos capitales; por destinarse los réditos de estos, para alimentos de las expresadas señoras; que, siendo hecha esa concesion por una Suprema autoridad, ninguna otra inferior, tal como la de este Estado, puede atacarla ó alternarla de modo alguno, y obrando así se vulnera el artículo 123 constitucional, invadiéndose como consecuencia, la esfera de la autoridad federal; por cuya razon este Juzgado de Distrito está facultado para conocer y decidir en este juicio, en virtud de las fracciones 3^a del artículo 101 y 1^a del 97 de la Constitucion de la República.

Considerando: que si las señoras religiosas segun lo dicho, no están en obligacion de pagar contribuciones por sus capitales, al exigirlos el Recaudador ataca la garantía concedida en los arts. 16 y 17 de la Carta federal, por haberse atacado á la propiedad

sin su consentimiento, y por no ser dicho funcionario autoridad competente, ni fundar la causa legal del procedimiento; por consiguiente, el expresado Recaudador no debió haber recogido la libranza de cuatrocientos pesos, que el Sr. D. Juan Sotelo, tenía para pagar al arrendatario D. Juan Balvaneda, para satisfacer contribuciones de las haciendas "Batan y San Francisco," supuesto que éstas, según consta de autos, dan el valor de lo que importan los dotes 6 capitales que en dichas fincas se les reconoce á las Sras. D^a Concepcion Izquierdo, D^a Mercedes Paz, D^a Jesus Maldonado, D^a Trinidad Ugalde, D^a Concepcion Coria y D^a Soledad Ramirez, las cuales hoy son dueñas de esas fincas por convenio particular.

Considerando, en cuanto á la paja de agua rematada por contribuciones de la casa núm. 5 de la calle de Cinco Señores: que éste procedimiento tampoco debió tener lugar, porque siendo el valor de la finca [fojas 31] de cuatro mil quinientos pesos, solo mil quinientos causan contribuciones y no los tres mil, por pertenecer á la señora ex-religiosa exclaustrada D^a Mariana Nuñez, la que por privilegio de la disposicion antes citada, está exenta de pagarlas; causándose solo la de los mil quinientos pesos, pertenecientes al C. Bonifacio Carmona, las cuales según constancias del expediente, están cubiertas.

Considerando: que las pruebas rendidas por la parte quejosa, han probado plenamente su accion, ya se atiende á los documentos exhibidos, ya á los testigos aducidos, pues estos por ser contestes y uniformes en sus dichos, y mayores de toda excepcion, prueban plenamente conforme á la ley 32 tít. 16 part. 3^a

Por tales razones y considerandos, y con fundamento de los arts. 16, 17, 97 y 117 de la Constitucion de la República y fraccion 3^a del art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez primer Suplente de Distrito dijo: que debia fallar y falló, 1^o

que se ampara á las señoras religiosas exclaustradas D^a Concepcion Izquierdo y demás que quedan nombradas, contra los actos del C. Recaudador de contribuciones, que les embargó una libranza por valor de cuatrocientos pesos, y remató una paja de agua de la casa núm. 5 de la calle de Cinco Señores, para pagar contribuciones por los capitales que ellas reconocen en las Haciendas del «Batan y San Francisco» y casa de Cinco Señores. 2^o Hágase saber, sacándose copia de esta sentencia para su publicacion; y clévese el expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision; así definitivamente juzgando lo decretó y firmó el C. Juez de Distrito primer Suplente, Lic. Mariano Pimentel.—Doy fé.—Mariano Pimentel.—Francisco Ruiz, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 18 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por los Sros. D. Bonifacio Carmona y D. Mariano Rodriguez Velasquez, en representacion de varias señoras religiosas exclaustradas, contra los actos del C. Recaudador de contribuciones, que embargó una libranza por valor de cuatrocientos pesos y remató una paja de agua, para hacer efectivos los impuestos locales por los capitales que tienen concedidos como dotes las mismas religiosas, no obstante que con arreglo á la circular del Gobierno de la Union de 26 de Febrero de 1861, están eximidos esos capitales de toda clase de contribuciones; por cuyo motivo creen las quejosas, que con el cobro de las establecidas en el Estado, se invade la esfera de la autoridad federal, y se vulneran las garantías consignadas en los arts. 16 y 27 de la Constitucion federal. Visto el informe de la autoridad; las pruebas rendidas en el término señalado al

efecto; el parecer fiscal; el fallo del inferior con cuanto mas se tuvo presente y ver convino. Por sus propios legales fundamentos, se confirma la sentencia pronunciada por el Juez primer Suplente de Distrito en 27 de Enero del presente año; que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege a las señoras religiosas exclaustradas D^{as} Concepcion Izquierdo y demas que han promovido este recurso, contra los actos del C. Recaudador de contribuciones, que les embargó una libranza por valor de cuatrocientos pesos, y remató una paja de agua de la casa núm. 5 de la calle de Cinco Señores en Querétaro, para hacer efectivas las contribuciones por los capitales que tienen encondados como dotes en las Haciendas del Batán y San Francisco y casa de Cinco Señores.

Devuélvanse estas actuaciones al Juez de Distrito que las elevó a revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese a su vez el Voto.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, veinticinco de Julio de mil ochocientos setenta y cinco.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por Manuel Cipriano Narvaez, contra el C. Juez 2º de lo criminal del departamento de esa ciudad, por violacion de garantías.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito:

El Promotor dice: que el presente juicio se ha seguido a instancia de los CC. Manuel y Cipriano Narvaez, que interpusieron recurso de amparo reclamando el acto del C. Juez 2º de 1ª instancia del ramo criminal de esta ciudad, que por un delito que se les atribuye de faltas cometidas al Regidor de ronda, el cual cual no merece pena corporal, se les consignó a la cárcel; juzgándolos dos veces por un mismo delito, pues tenían ya satisfecha una multa de 17 pesos, que se les impuso por dicha falta, y con enyo procedimiento juzgan violadas en su persona las garantías que la Constitución General de la República les otorga en sus arts. 24, 18 y 16.

En el informe que el Juez responsable rindió, ha procurado cincerarse negando haber extendido el recibo de la multa de 17 pesos que cobró a los quejosos, cuando estos por su parte, en el término probatorio, han evidenciado que hubo tal recibo, que con capeicidad se le recogió para desparecerlo, y que se les devolvió o trató de devolvérselos dicha cantidad cuando estaba ya acusado el Regidor Molina y el mismo Juez, que la impuso, motivos por que, aquellos afirman estar violado el art. 24, por habérseles sujetado a un juicio para conocer del mismo delito que habia ya terminado, mediante la multa que se les impuso con este objeto.

Este artículo dice en su segunda parte: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva, o se le condene." Para que pudiera decirse que los promoventes Narvaez,